

Sí a reforma fiscal, pero no a esta

El Gobierno dice que necesita más dinero, y que un gran aumento de los impuestos es la única manera de conseguirlo.

Pero es difícil entender la justificación de la reforma propuesta por el Laura Chinchilla junto con su aliado, el Partido Acción Ciudadana.

Si el problema fuera el de una recesión económica, Costa Rica no necesitaría ninguna reforma. Una vez que se recupere la economía, los ingresos tributarios se incrementarán. Mientras tanto, el Gobierno puede pedir dinero prestado para pagar su déficit, sobre todo porque el costo del crédito pasa a ser bajo.

Si la administración y sus aliados quieren hacer cambios fundamentales en la relación entre el sector privado y el Estado, el plan propuesto hace solo la mitad del trabajo necesario.

La reforma propuesta incrementaría el tamaño del Estado, lo cual en sí mismo no es necesariamente algo malo. Muchos países tienen altos impuestos, que financian un gran aparato del sector público.

Pero en estos países, el sector

estatal es eficiente. Las carreteras son modernas. El transporte público es rápido y barato. Los ciudadanos, no el hampa, son los dueños de las calles de las ciudades. Los enfermos no tienen que esperar semanas, ni hablar de meses, para consultar a un médico.

En cambio, no hay nada en la propuesta de reforma fiscal, que pudiera aumentar la productividad de un sector público, muchas de cuyas operaciones se caracterizan por la duplicación y la ineficiencia, y que tiene poca o ninguna obligación de rendir cuentas al público, al que supuestamente sirve.

Por último, no hay mucho uso de la invención de nuevos impuestos, cuando el Ministerio de Hacienda no puede cobrar adecuadamente los viejos, de manera eficiente y justa.

Un gran defecto del plan es que implica cambios en el impuesto al valor agregado, que afectará a la clase media y a los pobres, que tienden a gastar la mayor parte de sus ingresos, y que pagan esta carga en muchas de las compras.